UNEMI
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
FACULTAD DE POSGRADO

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

ARTÍCULOS PROFESIONALES DE ALTO NIVEL
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:

MAGÍSTER EN COMUNICACIÓN ESTRATEGICA CON MENCIÓN EN COMUNICACIÓN DIGITAL

TEMA:

La comunicación estratégica frente a la desinformación digital: desafíos para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas del Ecuador

Autor:

Ing. Christian Emmanuel Vargas Peñafiel[1]

Director:

Mgs. Gabriel Germán Usiña Báscones

***Milagro,* 2026**

La comunicación estratégica frente a la desinformación digital: desafíos para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas del Ecuador

Strategic Communication in the Face of Digital Disinformation: Challenges to Strengthen Citizen Trust in Ecuadorian Public Institutions

Christian Emmanuel Vargas Peñafiel[1]
https://orcid.org/0009-0000-2014-2696
cvargasp5@unemi.edu.ec
Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Guayas, Ecuador

Gabriel Germán Usiña Báscones
https://orcid.org/0009-0003-7695-0790
gusinab@unemi.edu.ec
Universidad Estatal de Milagro Milagro, Guayas, Ecuador

Mayra Alexandra Samaniego Arias
https://orcid.org/0000-0002-5672-8741
msamaniegoa@unemi.edu.ec
Universidad Estatal de Milagro Milagro, Guayas
Ecuador

*** Autor para correspondencia:** cvargasp5@unemi.edu.ec

Resumen

La expansión de plataformas digitales, sistemas algorítmicos e inteligencia artificial generativa ha incrementado la velocidad, escala y sofisticación con que circula la desinformación, creando riesgos para la credibilidad de las instituciones públicas y la calidad del debate democrático. El objetivo de este estudio es analizar cómo la comunicación estratégica puede fortalecer la confianza ciudadana frente a la desinformación digital en las instituciones públicas ecuatorianas. Se desarrolló una revisión integrativa de carácter documental y conceptual sustentada en un corpus de 30 fuentes académicas e institucionales publicadas entre 2007 y 2026, con prioridad para literatura reciente sobre desinformación, confianza pública, comunicación institucional, alfabetización mediática e inteligencia artificial, así como evidencia específica del Ecuador. El análisis temático identifica cinco resultados convergentes: la desinformación explota la velocidad y arquitectura de las plataformas; la confianza depende de la coherencia entre actuación institucional y comunicación; la comunicación bidireccional y la participación mejoran la legitimidad; las correcciones reactivas son insuficientes sin prevención, monitoreo y alfabetización mediática; y el uso de contenidos sintéticos durante procesos electorales ecuatorianos exige protocolos de verificación y transparencia. A partir de estos hallazgos se propone un modelo de cuatro capacidades institucionales: transparencia basada en evidencia, escucha y participación, monitoreo y respuesta oportuna, y alfabetización

mediática con colaboración multiactor. Se concluye que la comunicación estratégica puede contribuir a la confianza pública cuando se integra transversalmente a la gestión y no se limita a la difusión de mensajes.
Palabras clave: comunicación estratégica; desinformación digital; confianza ciudadana; comunicación pública; inteligencia artificial; Ecuador.

Abstract

The expansion of digital platforms, algorithmic systems, and generative artificial intelligence has increased the speed, scale, and sophistication of disinformation, creating risks for the credibility of public institutions and the quality of democratic debate. This study analyzes how strategic communication can strengthen citizen trust in the face of digital disinformation within Ecuadorian public institutions. An integrative documentary and conceptual review was conducted using a corpus of 30 academic and institutional sources published between 2007 and 2026, prioritizing recent literature on disinformation, public trust, institutional communication, media literacy, artificial intelligence, and evidence specific to Ecuador. The thematic analysis identifies five convergent findings: disinformation exploits the speed and architecture of platforms; trust depends on consistency between institutional performance and communication; two-way communication and participation support legitimacy; reactive corrections are insufficient without prevention, monitoring, and media literacy; and the use of synthetic content during Ecuadorian electoral processes requires verification and transparency protocols. Based on these findings, a four-capability institutional model is proposed: evidence-based transparency, listening and participation, timely monitoring and response, and media literacy combined with multi-stakeholder collaboration. The study concludes that strategic communication can contribute to public trust when it is embedded across institutional management rather than treated merely as message dissemination.

Keywords: strategic communication; digital disinformation; citizen trust; public communication; artificial intelligence; Ecuador.

Fecha de recibido: 07/10/2026
Fecha de aceptado: 08/10/2026
Fecha de publicado: 15/10/2026

Introducción

La comunicación pública se desarrolla actualmente en un entorno caracterizado por alta velocidad informativa, multiplicidad de emisores, circulación transnacional de contenidos y creciente dependencia de plataformas privadas para acceder a información política e institucional. Esta transformación amplía las posibilidades de interacción entre Estado y ciudadanía, pero también reduce el control que las organizaciones tenían sobre los tiempos, canales y marcos interpretativos de sus mensajes. Desde la perspectiva de la sociedad red, el poder comunicativo se distribuye entre actores institucionales, medios, comunidades digitales y usuarios capaces de producir, reinterpretar y amplificar contenidos en tiempo real (Castells, 2013). En consecuencia, la comunicación de las instituciones públicas ya no puede entenderse como un proceso lineal de emisión, sino como una práctica de gestión relacional dentro de un sistema informativo abierto y disputado.

En ese sistema, la desinformación representa un desafío estructural. Wardle y Derakhshan (2017) proponen distinguir entre información errónea, desinformación intencional y contenidos genuinos utilizados de manera dañina, distinción que evita reducir fenómenos heterogéneos a la etiqueta genérica de "fake news". De forma complementaria, Vraga y Bode (2020) sostienen que la clasificación de una afirmación como desinformación debe apoyarse en evidencia y conocimiento experto, porque no toda controversia equivale a falsedad. Esta precisión conceptual es especialmente importante para las instituciones públicas: responder de forma indiscriminada a críticas, errores y operaciones deliberadas de manipulación puede afectar la legitimidad de la propia respuesta.

La literatura muestra, además, que la arquitectura digital puede favorecer la difusión de contenidos falsos o emocionalmente intensos. Vosoughi, Roy y Aral (2018) encontraron que las noticias falsas se difundían más lejos, más rápido y a más personas que las verdaderas en el conjunto analizado de Twitter. Guess, Nagler y Tucker (2019), sin embargo, evidencian que la producción y el consumo de noticias falsas no se distribuyen uniformemente entre todos los usuarios, lo que obliga a evitar explicaciones deterministas. El problema, por tanto, no reside únicamente en la presencia de contenidos engañosos, sino en la interacción entre incentivos de plataforma, prácticas de usuarios, polarización, capacidades de verificación y condiciones institucionales de confianza.

La inteligencia artificial generativa incrementa esta complejidad porque facilita la producción de textos, imágenes, audios y videos sintéticos con bajos costos y elevada plausibilidad. Vaccari y Chadwick (2020) demostraron que los deepfakes políticos pueden aumentar la incertidumbre y erosionar la confianza aun cuando no logren convencer plenamente sobre la veracidad de un contenido. En Ecuador, la problemática dejó de ser hipotética. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea registró durante las elecciones de 2025 una mayor presencia de contenido generado mediante inteligencia artificial y señaló debilidades en ciertas respuestas institucionales contra la desinformación, entre ellas falta de transparencia metodológica e imparcialidad percibida (European Union Election Observation Mission [EU EOM], 2025). Estudios posteriores documentan preocupación ciudadana por el impacto de la IA en la integridad electoral y por la necesidad de regulación, verificación y alfabetización mediática (Suing, 2025; Suing, Ganazhapa, & Medina, 2026).

Este escenario vuelve central el concepto de confianza. La confianza ciudadana no depende exclusivamente de la frecuencia de los mensajes oficiales, sino de la percepción acumulada sobre competencia, integridad, apertura, capacidad de respuesta y coherencia institucional. La OECD (2024c) subraya que la confianza en las instituciones públicas se relaciona con experiencias de servicio, percepción de fiabilidad, capacidad de respuesta y oportunidades de participación. Canel y Luoma-aho (2019) plantean, en la misma línea, que la comunicación del sector público debe gestionar brechas entre expectativas ciudadanas y desempeño institucional, lo que exige escuchar, explicar y sostener relaciones, no solo informar.

La comunicación estratégica ofrece un marco pertinente para abordar este problema porque desplaza la atención desde la producción táctica de contenidos hacia la articulación de la comunicación con los objetivos, decisiones y relaciones de la organización. Hallaban et al. (2007) la definen como el uso intencional de la comunicación para cumplir la misión organizacional, mientras que Zerfass et al. (2018) destacan su carácter transversal y su contribución a la coordinación de acciones, significados y relaciones con los públicos. En el

ámbito público, esta perspectiva implica integrar la comunicación a los procesos de gobernanza, gestión de riesgos, transparencia, participación y rendición de cuentas.

A pesar del crecimiento de la literatura internacional sobre desinformación, corrección, alfabetización mediática y confianza, persiste una necesidad de articulación aplicada al sector público ecuatoriano. Los estudios nacionales recientes se concentran principalmente en campañas electorales, deepfakes, redes sociales y alfabetización mediática (Miranda Romero et al., 2025; Guadarrama Torres, Virbanescu, & Tapia Segovia, 2026; Suing et al., 2026). Resulta necesario conectar estos hallazgos con la teoría de comunicación estratégica para identificar capacidades institucionales que puedan funcionar antes, durante y después de una crisis de información.

En consecuencia, el objetivo general de este estudio es analizar cómo la comunicación estratégica puede fortalecer la confianza ciudadana frente a la desinformación digital en las instituciones públicas del Ecuador. De manera específica, se busca: a) sistematizar aportes teóricos sobre comunicación estratégica, confianza y desinformación; b) identificar mecanismos comunicacionales con potencial preventivo y correctivo; c) interpretar evidencia reciente del contexto ecuatoriano; y d) proponer un modelo conceptual de capacidades institucionales aplicable a la gestión pública. La pregunta que guía el trabajo es: ¿de qué manera la comunicación estratégica puede contribuir al fortalecimiento de la confianza ciudadana frente a la desinformación digital en las instituciones públicas ecuatorianas?

Fundamentación teórica

Comunicación estratégica, relaciones y legitimidad institucional

La comunicación estratégica se diferencia de una concepción meramente instrumental porque vincula comunicación, dirección y toma de decisiones. Hallahan et al. (2007) integraron aportes de relaciones públicas, comunicación corporativa, comunicación política y otras disciplinas para explicar que lo “estratégico” supone intencionalidad, coordinación y orientación hacia la misión. Esta idea fue ampliada por Zerfass et al. (2018), quienes advierten que el campo no debe limitarse a persuasión ni a campañas, sino estudiar cómo organizaciones y actores utilizan la comunicación para avanzar objetivos en entornos complejos y, al mismo tiempo, responder a expectativas sociales.

Desde las relaciones públicas, Grunig (2009) subraya que la digitalización potencia modelos de comunicación bidireccional, interactiva y potencialmente simétrica. Su relevancia para el sector público radica en que la legitimidad no puede sostenerse únicamente mediante control del mensaje: requiere mecanismos de escucha, negociación y aprendizaje institucional. La comunicación adquiere valor cuando permite detectar preocupaciones, incorporar retroalimentación y adaptar decisiones a expectativas legítimas de los públicos.

Argenti (2017) muestra que la comunicación contemporánea se ha desplazado desde funciones tácticas hacia niveles de dirección donde contribuye a ejecutar estrategia y gestionar reputación. Cornelissen (2023) coincide en que la comunicación corporativa debe integrarse con la estrategia, la identidad y las relaciones con grupos de interés. Trasladado a la administración pública, este razonamiento implica que una oficina de comunicación no puede compensar con mensajes una actuación institucional incoherente. La credibilidad depende de la alineación entre políticas, servicios, decisiones, evidencia disponible y discurso público.

Canel y Luoma-aho (2019) aportan una especificidad decisiva: en el sector público, la comunicación opera bajo obligaciones de interés general, rendición de cuentas y pluralidad de públicos. Por ello, los activos intangibles -confianza, legitimidad, reputación y satisfacción ciudadana- deben comprenderse como resultados relacionales acumulativos. Una estrategia comunicacional efectiva es aquella que reduce brechas entre lo que la ciudadanía espera, lo que la institución puede ofrecer y la forma en que explica sus decisiones.

Desinformación digital y arquitectura de plataformas

Wardle y Derakhshan (2017) plantean el concepto de "desorden informativo" para mostrar que los contenidos problemáticos difieren en falsedad, intención y daño. La precisión conceptual es relevante para diseñar respuestas proporcionales: una afirmación incorrecta compartida de buena fe requiere una estrategia distinta a una operación coordinada de manipulación. Tandoc, Lim y Ling (2018), al revisar definiciones académicas de fake news, demostraron que el término ha sido utilizado para fenómenos diversos -sátira, fabricación, manipulación, publicidad y propaganda-, lo que refuerza la necesidad de criterios operativos claros.

La dinámica de difusión constituye el segundo componente del problema. El estudio de Vosoughi et al. (2018) evidenció ventajas de difusión para noticias falsas en la red analizada, asociadas, entre otros factores, con novedad y respuestas emocionales. Guess et al. (2019) matizaron la idea de exposición universal al mostrar que el intercambio de fuentes de fake news se concentraba en grupos específicos. En términos estratégicos, ambos trabajos sugieren que el monitoreo debe combinar análisis de velocidad, alcance, redes de amplificación y segmentación de públicos en lugar de asumir que todo contenido falso afecta de igual manera a toda la población.

La aparición de contenidos sintéticos añade una capa adicional de incertidumbre. Vaccari y Chadwick (2020) explican que el daño de los deepfakes no se limita al engaño directo: también pueden generar una "prima de incertidumbre" en la que las personas dudan de contenidos auténticos. Este fenómeno favorece el denominado dividendo del mentiroso, por el cual actores cuestionados pueden desacreditar evidencia real alegando manipulación. Para las instituciones públicas, la consecuencia es clara: la verificación debe acompañarse de trazabilidad, archivos verificables, fuentes primarias accesibles y protocolos de autenticación.

En el caso ecuatoriano, Miranda Romero et al. (2025) analizaron deepfakes viralizados durante campañas electorales recientes y encontraron patrones de manipulación emocional y polarización. Guadarrama Torres et al. (2026) identificaron, mediante netnografía y estudio de caso en Cotopaxi, circulación de fake news y contenidos manipulados en plataformas sociales, con diferencias entre grupos de edad y contextos socioculturales. Esta evidencia refuerza la necesidad de estrategias diferenciadas por territorio, plataforma y alfabetización digital.

Confianza ciudadana como activo estratégico

La confianza institucional funciona como una expectativa sobre la capacidad y disposición de una organización pública para actuar de manera competente, íntegra y orientada al interés colectivo. En el marco de la OECD (2024c), la confianza se asocia con percepciones de fiabilidad, capacidad de respuesta, apertura, integridad y equidad. Estas dimensiones se conectan directamente con la comunicación porque la ciudadanía evalúa a las instituciones tanto por sus resultados como por la calidad de las explicaciones, la oportunidad de la información y la posibilidad de participar.

La comunicación, sin embargo, no produce confianza de forma automática. Argenti (2017) y Cornelissen (2023) sostienen que reputación y credibilidad dependen de la consistencia entre acciones y mensajes. En el sector público esta condición es todavía más exigente: una respuesta comunicacional rápida, pero sin evidencia puede agravar la incertidumbre; una corrección técnicamente correcta pero tardía puede dejar espacio para que se consoliden interpretaciones falsas; y una narrativa oficial que ignore preguntas legítimas puede ser percibida como propaganda.

La OECD (2021) propone fortalecer la función de comunicación pública mediante profesionalización, coordinación, transparencia, participación y evaluación. Esta aproximación permite entender la confianza como un resultado de capacidades institucionales sostenidas. La comunicación estratégica frente a la desinformación debe, por tanto, vincularse con políticas de datos abiertos, vocerías técnicamente preparadas, sistemas de respuesta, gestión documental, atención ciudadana y mecanismos de rendición de cuentas.

Prevención, corrección y alfabetización mediática

La evidencia sobre intervenciones contra la desinformación indica que la corrección posterior es necesaria, pero no suficiente. Walter, Cohen, Holbert y Morag (2020), en un metaanálisis sobre fact-checking, encontraron efectos correctivos positivos que varían según las características del mensaje y del público. Ecker et al. (2022) muestran, además, que la persistencia de creencias falsas puede explicarse por factores cognitivos, motivacionales y sociales, por lo que desmentir un contenido no garantiza revertir completamente su influencia.

Las intervenciones preventivas ofrecen alternativas complementarias. Roozenbeek y van der Linden (2019) demostraron que la inoculación psicológica mediante exposición previa a técnicas de manipulación puede aumentar la resistencia a desinformación posterior. Pennycook y Rand (2019) hallaron que juicios agregados sobre la calidad de fuentes pueden contribuir a identificar contenidos problemáticos, mientras que Pennycook et al. (2021) mostraron que pequeños recordatorios orientados a la precisión pueden mejorar la calidad de lo que las personas comparten. Kozyreva, Lewandowsky y Hertwig (2020) sintetizan estas propuestas como herramientas cognitivas que ayudan a los usuarios a desenvolverse en arquitecturas digitales que compiten por atención.

Para el sector público, estos hallazgos sugieren una combinación de acciones: corrección basada en evidencia, pre-bunking ante narrativas previsibles, diseño de contenidos que faciliten la verificación, alfabetización mediática e informacional y colaboración con actores externos. UNESCO (2023) plantea que la gobernanza de plataformas requiere enfoques multiactor que protejan la libertad de expresión y el acceso a información confiable. Ireton y Posetti (2018) destacan, desde la formación periodística, la importancia de verificación y alfabetización frente a noticias falsas. Estas capacidades no deben activarse únicamente en crisis electorales, sino incorporarse a la comunicación cotidiana.

Transformación digital, inteligencia artificial y contexto ecuatoriano

La transformación digital multiplica oportunidades de acceso a información pública y, al mismo tiempo, expone a las instituciones a ciclos de información más rápidos. La OECD (2024a) advierte que proteger la integridad informativa requiere respuestas de política pública compatibles con derechos fundamentales, transparencia, pluralidad y resiliencia social. La misma organización subraya que la calidad de la gobernanza y la confianza siguen siendo

desafíos relevantes en América Latina y el Caribe (OECD, 2024b). Por ello, la modernización tecnológica sin modernización comunicacional puede aumentar la capacidad de publicar, pero no necesariamente la capacidad de generar comprensión y confianza.

En Ecuador, Suing (2025) encontró preocupación por el uso de inteligencia artificial generativa en la desinformación durante las elecciones presidenciales de 2025, así como apoyo a mecanismos de regulación, etiquetado y verificación. La EU EOM (2025) documentó 131 instancias de contenido generado por IA en la campaña monitoreada y señaló la existencia de sitios o cuentas que se presentaban como verificadores mientras difundían contenido engañoso. El informe también observó que algunas instituciones respondieron a supuesta desinformación con formatos similares al fact-checking sin transparentar siempre su metodología, lo que ilustra un riesgo crítico: combatir la desinformación con prácticas poco verificables puede deteriorar la confianza que se busca proteger.

Suing et al. (2026) aportan evidencia adicional sobre alfabetización mediática e informacional en grupos vulnerables del Ecuador. Sus resultados sugieren limitaciones diferenciadas para detectar desinformación generada por IA y resaltan la necesidad de coordinación institucional, educación mediática y regulación. Estas conclusiones convergen con UNESCO (2023) y la OECD (2024a): la integridad del ecosistema informativo no depende de un único actor, sino de capacidades distribuidas entre instituciones, plataformas, medios, academia y ciudadanía.

Modelo conceptual y proposiciones

A partir de la literatura revisada, se propone un modelo conceptual en el que la confianza ciudadana y la legitimidad institucional constituyen el resultado relacional de cuatro capacidades comunicacionales. La primera es la transparencia basada en evidencia, entendida como capacidad para publicar fuentes, criterios, datos y correcciones verificables. La segunda es la escucha y participación, que transforma la comunicación pública de un esquema unidireccional a uno de interacción y aprendizaje. La tercera es el monitoreo, anticipación y respuesta oportuna, orientada a reducir vacíos informativos y detectar narrativas de riesgo antes de su escalamiento. La cuarta es la alfabetización mediática y colaboración multiactor, necesaria para aumentar la resiliencia del ecosistema y evitar que el Estado monopolice la definición de lo verdadero. Estas capacidades operan bajo una presión contextual generada por la velocidad de plataformas, algoritmos de recomendación y contenidos sintéticos.

P1. Una mayor transparencia comunicacional sustentada en evidencia verificable favorece la credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

P2. La comunicación bidireccional, la escucha y la participación ciudadana fortalecen la legitimidad institucional al reducir brechas entre expectativas, decisiones y explicaciones públicas.

P3. El monitoreo sistemático y la respuesta oportuna reducen el espacio para la consolidación de narrativas falsas y disminuyen el riesgo reputacional asociado a vacíos informativos.

P4. La alfabetización mediática e informacional y la colaboración con actores independientes aumentan la resiliencia social frente a la desinformación y mejoran la calidad de la respuesta institucional.

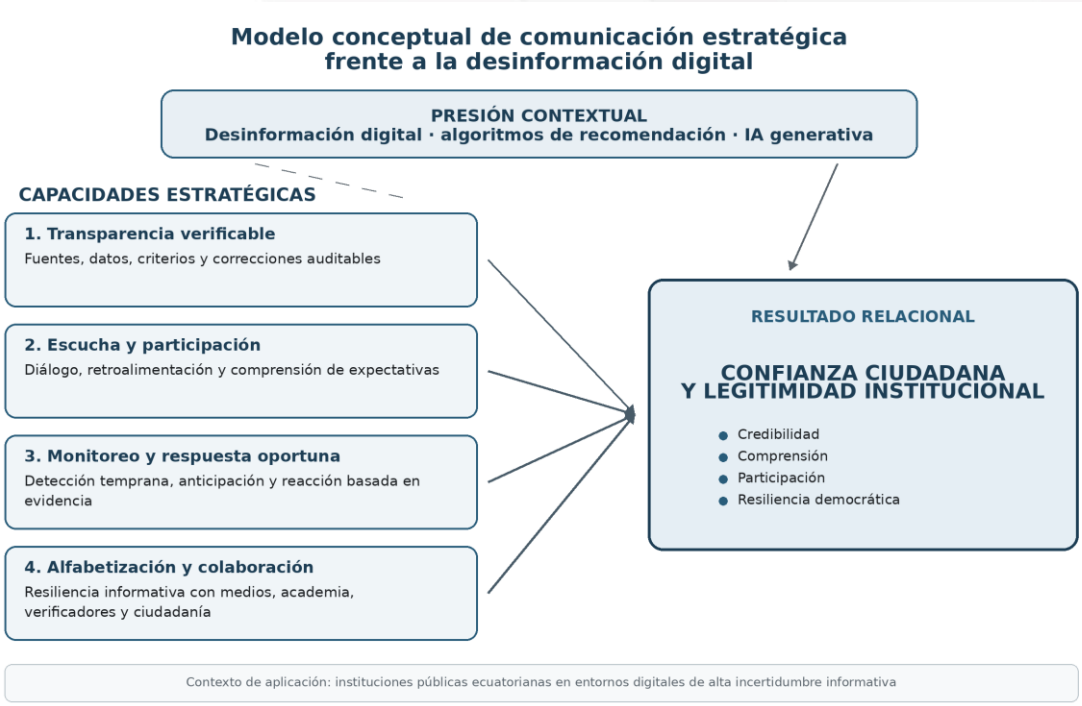


Figura 1. Modelo conceptual de comunicación estratégica para fortalecer la confianza ciudadana frente a la desinformación digital.

Nota. Elaboración propia a partir de la síntesis de la literatura revisada. Las cuatro capacidades operan de manera complementaria bajo presiones contextuales asociadas con la desinformación digital, los algoritmos de recomendación y la inteligencia artificial generativa.

Métodos y materiales

Diseño de investigación

El estudio adopta un enfoque cualitativo de revisión integrativa, documental y conceptual. Su propósito no es estimar un efecto causal ni producir resultados estadísticos originales, sino integrar evidencia teórica, empírica e institucional para responder una pregunta aplicada sobre comunicación estratégica y confianza pública. La revisión integrativa resulta pertinente porque el fenómeno combina literatura de comunicación estratégica, relaciones públicas, psicología de la desinformación, gobernanza digital, alfabetización mediática y estudios electorales. Se optó por un diseño transparente de síntesis temática y no por una revisión sistemática exhaustiva, debido a la heterogeneidad disciplinar de las fuentes y a que el objetivo central es construir un marco conceptual contextualizado para Ecuador.

Estrategia de búsqueda y selección

El corpus final quedó integrado por 30 fuentes académicas e institucionales publicadas entre 2007 y 2026. Se priorizó literatura de 2017-2026 para captar el desarrollo reciente de la desinformación digital, la inteligencia artificial y la confianza pública, y se conservaron trabajos anteriores cuando cumplían una función fundacional en comunicación estratégica y digitalización. La identificación de fuentes se realizó mediante búsqueda dirigida y verificación bibliográfica en páginas editoriales, repositorios académicos y sitios oficiales de organismos internacionales. Se emplearon combinaciones de términos en español e inglés: “strategic communication”, “public communication”, “institutional trust”, “digital disinformation”,

"misinformation", "fact-checking", "media literacy", "deepfakes", "generative AI", "Ecuador elections" y "public institutions".

Los criterios de inclusión fueron: a) relación directa con al menos una de las categorías analíticas del estudio; b) publicación revisada por pares, libro académico reconocido o informe institucional con metodología y autoría identificables; c) pertinencia para la comunicación pública, la confianza, la desinformación o el contexto ecuatoriano; y d) disponibilidad de datos bibliográficos verificables. Se excluyeron textos de opinión sin sustento metodológico, publicaciones duplicadas, contenidos comerciales y referencias cuya procedencia no pudiera verificarse. La selección no se presenta como un censo completo de la literatura mundial, sino como un corpus analítico suficiente para construir y contrastar el modelo conceptual propuesto.

Procedimiento de análisis

Las fuentes se organizaron mediante codificación temática deductiva-inductiva. Inicialmente se definieron categorías derivadas de la pregunta de investigación: comunicación estratégica, desinformación digital, confianza institucional, respuesta comunicacional, alfabetización mediática y contexto ecuatoriano. Durante la lectura se añadieron subcategorías emergentes relacionadas con velocidad de difusión, coherencia entre acción y discurso, bidireccionalidad, prevención, inteligencia artificial, verificación y gobernanza multiactor. La síntesis comparó convergencias, tensiones y condiciones de aplicación, evitando asumir equivalencia entre estudios con diseños, poblaciones y contextos distintos.

Criterios de rigor

Para fortalecer la trazabilidad se verificaron autores, año, revista o entidad editora y DOI o enlace institucional de las 30 referencias. Las afirmaciones sobre Ecuador se sustentan en estudios específicos del país y en el informe de la EU EOM de 2025, mientras que los mecanismos de intervención se apoyan en literatura internacional revisada por pares. No se fabricaron encuestas, entrevistas, coeficientes, porcentajes ni resultados de campo. Cuando la evidencia permite inferir una implicación para las instituciones ecuatorianas, esta se presenta como interpretación o proposición conceptual y no como resultado causal observado.

Consideraciones éticas

La investigación utiliza únicamente fuentes secundarias de acceso público y no involucra participantes humanos, datos personales ni información confidencial. Por tanto, no requiere consentimiento informado para el análisis presentado. No obstante, una futura validación empírica del modelo mediante encuestas, entrevistas o experimentos debería someterse a los procedimientos de evaluación ética institucional que correspondan.

Tabla 1. Categorías de análisis y operacionalización conceptual

Categoría	Definición analítica	Indicadores cualitativos	Base teórica principal
Transparencia basada en evidencia	Disponibilidad de fuentes, criterios y trazabilidad de la información institucional.	Datos abiertos; fuentes primarias; metodología de verificación; corrección pública de errores.	Argenti (2017); OECD (2021, 2024a).
Escucha y participación	Capacidad de sostener comunicación bidireccional y aprender de las demandas de los públicos.	Canales de escucha; respuesta a preguntas; consulta; participación; retroalimentación.	Grunig (2009); Canel & Luoma-aho (2019).

Categoría	Definición analítica	Indicadores cualitativos	Base teórica principal
Monitoreo y respuesta	Detección temprana de riesgos informativos y respuesta oportuna, proporcional y verificable.	Latencia de respuesta; priorización de narrativas; coordinación de vocerías; protocolos de crisis.	Cornelissen (2023); Walter et al. (2020).
Alfabetización y colaboración	Fortalecimiento de capacidades ciudadanas y cooperación con medios, academia y verificadores.	Pre-bunking; educación mediática; alianzas; herramientas de verificación.	Kozyreva et al. (2020); UNESCO (2023).
Confianza y legitimidad	Evaluación acumulada de competencia, integridad, apertura y coherencia institucional.	Credibilidad; percepción de transparencia; aceptación de explicaciones; disposición a cooperar.	OECD (2024c); Canel & Luoma-aho (2019).

Nota. Elaboración propia a partir de la literatura revisada.

Análisis de resultados

El análisis temático del corpus permitió identificar cinco hallazgos convergentes. Estos resultados corresponden a una síntesis de evidencia secundaria y no a mediciones originales realizadas por el autor. Su valor reside en organizar mecanismos documentados en la literatura y relacionarlos con las necesidades comunicacionales de las instituciones públicas ecuatorianas.

Hallazgo 1. La velocidad y la arquitectura de las plataformas amplifican el riesgo informativo

La desinformación no compite en igualdad de condiciones con la información oficial. Los incentivos de novedad, emocionalidad y engagement pueden favorecer contenidos llamativos, mientras que la respuesta institucional suele depender de validaciones internas, coordinación jurídica y autorización de vocerías. Vosoughi et al. (2018) documentaron la mayor velocidad y alcance de contenidos falsos en la red estudiada, mientras que Guess et al. (2019) demostraron que la exposición y difusión se concentran en ciertos usuarios. La implicación estratégica es doble: la institución necesita rapidez, pero también segmentación y priorización para no amplificar rumores marginales.

Este hallazgo sugiere que un sistema de monitoreo no debe limitarse a contabilizar menciones. Debe evaluar origen, crecimiento, actores amplificadores, plataforma, audiencia, daño potencial y grado de falsedad verificable. La respuesta puede variar desde no intervenir, publicar evidencia preventiva, aclarar preguntas frecuentes o activar una corrección formal. La rapidez, por sí sola, no es un indicador suficiente de eficacia; debe combinarse con precisión y proporcionalidad.

Hallazgo 2. La confianza depende más de la coherencia que del volumen de comunicación

La literatura de comunicación estratégica coincide en que la credibilidad se construye cuando existe congruencia entre comportamiento institucional y mensaje. Argenti (2017) y Cornelissen (2023) ubican la comunicación en la ejecución de la estrategia, no como capa decorativa posterior. En el sector público, Canel y Luoma-aho (2019) explican que las brechas entre expectativas y desempeño afectan los intangibles institucionales. Por ello, aumentar la frecuencia de publicaciones en redes sociales no compensa contradicciones entre datos, vocerías o decisiones.

La transparencia efectiva requiere explicar no solo qué ocurrió, sino cómo se conoce, qué fuente respalda la afirmación, qué incertidumbres existen y qué se hará si aparece nueva

evidencia. La OECD (2021) insiste en profesionalizar la comunicación pública y vincularla con transparencia, participación y evaluación. En contextos de desinformación, esta trazabilidad es especialmente relevante porque permite que terceros -medios, academia, verificadores y ciudadanos- reproduzcan o cuestionen la evidencia institucional.

Hallazgo 3. La bidireccionalidad y la participación fortalecen la legitimidad

El modelo relacional de Grunig (2009) y la comunicación pública centrada en el ciudadano de Canel y Luoma-aho (2019) convergen en una idea: escuchar es una capacidad estratégica. Las instituciones que solo publican comunicados pueden dejar sin respuesta dudas que posteriormente alimentan interpretaciones alternativas. La participación no elimina el conflicto ni garantiza aceptación de todas las decisiones, pero puede mejorar comprensión, detectar errores y ofrecer señales de apertura institucional.

Este resultado es coherente con los determinantes de confianza identificados por la OECD (2024c), en los que la capacidad de respuesta y la voz ciudadana ocupan un lugar relevante. La implicación para Ecuador es que la gestión contra la desinformación debe incorporar canales de preguntas, protocolos de respuesta a comunidades específicas, lenguaje accesible y mecanismos para reconocer incertidumbre. La confianza se debilita cuando la institución parece hablar únicamente "hacia" la ciudadanía y no "con" ella.

Hallazgo 4. La corrección reactiva necesita prevención y alfabetización mediática

El fact-checking es útil, pero sus efectos son condicionados. Walter et al. (2020) encontraron efectos correctivos positivos en promedio, mientras Ecker et al. (2022) muestran que creencias falsas pueden persistir incluso después de una corrección. Esto significa que las instituciones no deben depender exclusivamente del desmentido una vez que una narrativa se viraliza.

La evidencia sobre inoculación y recordatorios de precisión ofrece mecanismos preventivos. Roozenbeek y van der Linden (2019) mostraron que aprender técnicas de manipulación puede aumentar resistencia; Pennycook et al. (2021) demostraron que orientar la atención hacia la precisión puede mejorar la calidad de lo compartido; y Pennycook y Rand (2019) mostraron el potencial de evaluaciones colectivas de calidad de fuentes. Kozyreva et al. (2020) sitúan estas intervenciones dentro de un repertorio de herramientas cognitivas para la ciudadanía. Aplicadas al sector público, estas ideas respaldan campañas educativas, pre-bunking, explicadores, repositorios de evidencia y alianzas con actores externos.

Hallazgo 5. La inteligencia artificial eleva el riesgo de incertidumbre y exige nuevos protocolos en Ecuador

La evidencia ecuatoriana reciente confirma que el contenido sintético ya forma parte del entorno político. La EU EOM (2025) identificó un crecimiento del contenido generado con IA durante la campaña electoral y advirtió sobre cuentas que simulaban funciones de verificación. Suing (2025) reportó preocupación, desconfianza y demanda de regulación frente al uso de IA en elecciones. Miranda Romero et al. (2025) evidenciaron el uso de deepfakes con efectos de polarización y manipulación emocional, mientras Guadarrama Torres et al. (2026) observaron circulación de noticias falsas y contenidos manipulados en el caso estudiado en Cotopaxi.

La investigación de Suing et al. (2026) profundiza el problema al mostrar brechas de alfabetización mediática e informacional entre grupos vulnerables. Esta heterogeneidad implica que una respuesta institucional uniforme puede dejar fuera a comunidades con menor

acceso o competencias digitales. Los protocolos de comunicación deberían incluir etiquetado de contenidos oficiales, archivos de piezas originales, canales de verificación, formatos accesibles y coordinación con medios locales y actores comunitarios. El reto no es solo desmentir un deepfake, sino demostrar de manera comprensible por qué es falso y cómo reconocer técnicas similares en el futuro.

Tabla 2. Síntesis de hallazgos e implicaciones para la gestión pública ecuatoriana

Hallazgo	Síntesis de evidencia	Implicación institucional	Indicadores sugeridos
Velocidad y amplificación	La difusión digital puede superar los tiempos institucionales y concentrarse en redes específicas.	Monitorear riesgo, no solo volumen; priorizar narrativas por daño potencial.	Tiempo de detección; latencia de respuesta; alcance de aclaraciones.
Coherencia y transparencia	La confianza depende de congruencia entre actuación, evidencia y mensaje.	Publicar fuentes, criterios, límites e historial de correcciones.	Porcentaje de piezas con fuente; consistencia de vocerías; correcciones públicas.
Diálogo y participación	La bidireccionalidad ayuda a detectar dudas, errores y expectativas.	Abrir canales de escucha, preguntas y participación segmentada.	Tasa de respuesta; temas recurrentes; participación ciudadana.
Prevención y alfabetización	Fact-checking funciona mejor como parte de un portafolio con pre-bunking y alfabetización.	Crear explicadores, campañas de precisión y alianzas con verificadores/academia.	Alcance educativo; reconocimiento de técnicas; alianzas activas.
IA y contenidos sintéticos	Deepfakes y contenido generado por IA elevan incertidumbre y polarización.	Autenticar contenidos oficiales y definir protocolos de verificación de material sintético.	Piezas autenticadas; incidentes IA verificados; tiempo de respuesta especializado.

Nota. La tabla sintetiza resultados de la revisión; los indicadores son propuestas para futura validación empírica.

Discusión

Los resultados permiten responder a la pregunta de investigación mediante una premisa central: la comunicación estratégica puede fortalecer la confianza ciudadana frente a la desinformación cuando funciona como capacidad institucional transversal y no como reacción aislada del área de prensa. Este planteamiento es consistente con Hallahan et al. (2007) y Zerfass et al. (2018), para quienes la comunicación estratégica se relaciona con la misión, la coordinación y la gestión de relaciones. En el sector público, la consecuencia práctica es que transparencia, datos, atención ciudadana, gestión de crisis y vocería deben operar bajo criterios compartidos.

La primera contribución del estudio es integrar dos literaturas que con frecuencia avanzan en paralelo. La investigación sobre desinformación se ha concentrado en comportamiento de usuarios, difusión, corrección y diseño de intervenciones; la literatura de comunicación estratégica, en cambio, se enfoca en relaciones, reputación, dirección y legitimidad. El modelo propuesto conecta ambos niveles: las instituciones necesitan comprender los mecanismos cognitivos y de plataforma, pero también revisar su propia coherencia, capacidad de escucha y gobernanza. La desinformación no es únicamente un "contenido externo" que se elimina; también puede prosperar cuando existe un vacío de información, baja confianza previa o comunicación oficial difícil de verificar.

La segunda contribución es desplazar la respuesta desde un enfoque exclusivamente reactivo hacia uno preventivo. La evidencia de Walter et al. (2020) y Ecker et al. (2022) muestra que corregir es necesario pero puede tener límites; los trabajos de Roozenbeek y van der Linden

(2019), Pennycook y Rand (2019) y Pennycook et al. (2021) sugieren que inoculación, atención a la precisión y evaluación de fuentes pueden complementar la corrección. Para las instituciones públicas, esto significa preparar a la ciudadanía antes de que ocurra una crisis, anticipar narrativas previsibles y facilitar habilidades de verificación.

La tercera contribución se relaciona con la transparencia metodológica. La observación de la EU EOM (2025) sobre respuestas institucionales que adoptaron estética de fact-checking sin explicar suficientemente su método es especialmente relevante. Una institución pública posee autoridad formal, por lo que etiquetar unilateralmente un contenido como falso puede ser interpretado como ejercicio de poder si no se muestran fuentes, procedimientos y criterios. La respuesta estratégica debe ser auditable: identificar la afirmación, presentar evidencia, distinguir hechos de interpretación y, cuando sea necesario, reconocer incertidumbre.

Los estudios ecuatorianos recientes confirman que la inteligencia artificial generativa cambia el nivel de exigencia. Suing (2025), Miranda Romero et al. (2025) y Suing et al. (2026) describen riesgos de manipulación, desconfianza y brechas de alfabetización. El problema no es exclusivamente tecnológico. Si los ciudadanos carecen de herramientas para evaluar autenticidad, o si las instituciones no ofrecen canales confiables de verificación, el aumento de contenido sintético puede producir una crisis de autenticidad generalizada. En este contexto, la confianza funciona como un amortiguador: una institución con historial de transparencia dispone de mayor capital relacional para corregir; una institución con credibilidad baja enfrenta mayor dificultad incluso cuando comunica información correcta.

La dimensión territorial y social también importa. Guadarrama Torres et al. (2026) muestran que la circulación y recepción de fake news en Cotopaxi debe interpretarse en relación con plataformas, edades y contextos comunitarios. Una política nacional de comunicación no debería asumir homogeneidad de públicos. Se requieren formatos móviles, lenguaje claro, versiones interculturales cuando correspondan, alianzas con medios locales y mecanismos que no dependan exclusivamente de redes sociales comerciales. Esta necesidad coincide con el enfoque de UNESCO (2023), que plantea soluciones multiactor para la gobernanza del entorno digital.

El modelo propuesto también introduce una tensión relevante: responder rápido y responder bien no siempre son objetivos idénticos. Las instituciones públicas enfrentan procedimientos internos que pueden ralentizar la validación, mientras que las redes demandan inmediatez. La solución no consiste en eliminar controles, sino en preparar protocolos antes de la crisis: responsables definidos, matrices de severidad, fuentes previamente identificadas, vocerías autorizadas, plantillas de evidencia y mecanismos de actualización. Una organización preparada reduce el tiempo de reacción sin sacrificar precisión.

Otra tensión aparece entre visibilidad y amplificación. Desmentir públicamente un rumor de alcance limitado puede aumentar su exposición. Por ello, el monitoreo estratégico debe incorporar umbrales de intervención. No toda falsedad exige un comunicado masivo; algunas pueden manejarse mediante respuesta directa, actualización en preguntas frecuentes o coordinación con actores específicos. La decisión debería considerar daño potencial, velocidad, penetración en públicos relevantes, plausibilidad, persistencia y relación con funciones críticas de la institución.

Desde la perspectiva de confianza, la comunicación estratégica debe ser evaluada por resultados relacionales y no únicamente por métricas de alcance. El número de publicaciones,

impresiones o seguidores ofrece información operativa, pero no demuestra credibilidad ni comprensión. La OECD (2024c) refuerza la importancia de evaluar experiencia, apertura, capacidad de respuesta e integridad. El modelo de este estudio sugiere combinar métricas digitales con indicadores de confianza, comprensión, percepción de transparencia y capacidad ciudadana para verificar información.

La revisión presenta limitaciones. El corpus es integrativo y dirigido, no una revisión sistemática exhaustiva con metaanálisis; por tanto, no permite estimar tamaños de efecto globales ni afirmar causalidad. Además, la literatura ecuatoriana empírica sobre comunicación estratégica institucional y desinformación todavía es limitada y se concentra en procesos electorales recientes. Estas restricciones no invalidan el marco conceptual, pero obligan a tratar las proposiciones como hipótesis para futura contrastación. Una siguiente fase podría aplicar encuestas experimentales, análisis de redes, estudios de caso institucionales o diseños longitudinales para medir cómo transparencia, velocidad, participación y alfabetización influyen en confianza.

Conclusiones

La revisión desarrollada permite concluir que la desinformación digital constituye, para las instituciones públicas, un problema simultáneamente comunicacional, organizacional y democrático. No se limita a la presencia de afirmaciones falsas, sino que se configura por la interacción entre velocidad de circulación, arquitectura algorítmica, fragmentación de audiencias, contenidos sintéticos y niveles previos de confianza institucional. En consecuencia, la respuesta pública no puede quedar reducida a desmentidos episódicos ni a una mayor frecuencia de publicaciones. El desafío central consiste en construir capacidades institucionales capaces de sostener credibilidad, trazabilidad y comprensión pública en un entorno donde la autenticidad de los contenidos es cada vez más difícil de evaluar.

La pregunta de investigación puede responderse afirmativamente, aunque de forma condicionada: la comunicación estratégica puede fortalecer la confianza ciudadana frente a la desinformación cuando se integra a la gestión institucional y combina cuatro capacidades complementarias: transparencia verificable, escucha y participación, monitoreo y respuesta oportuna, y alfabetización mediática con colaboración multiactor. El valor del modelo no radica en considerar estas capacidades como acciones independientes, sino en explicar su interdependencia. La rapidez sin evidencia puede erosionar credibilidad; la transparencia sin oportunidad puede resultar irrelevante; la participación sin escucha efectiva puede convertirse en una práctica meramente formal; y la alfabetización sin redes de cooperación puede quedar limitada a iniciativas aisladas.

Desde el punto de vista teórico, el estudio contribuye a conectar la literatura de comunicación estratégica con la investigación sobre desinformación e integridad informativa. Esta articulación desplaza el foco desde la corrección de contenidos hacia la calidad de la relación entre institución y ciudadanía. La confianza aparece, así como un resultado relacional acumulativo, construido antes de la crisis y condicionado por la coherencia entre decisiones, desempeño, evidencia y discurso institucional. Bajo esta perspectiva, combatir la desinformación no significa aspirar a controlar el ecosistema informativo, sino reducir las

condiciones que favorecen la incertidumbre, los vacíos de información y la interpretación de la comunicación oficial como propaganda o imposición.

El contexto ecuatoriano refuerza la pertinencia de este enfoque. La evidencia revisada sobre procesos electorales recientes, circulación de deepfakes, contenidos generados mediante inteligencia artificial y diferencias de alfabetización mediática muestra que la vulnerabilidad informativa no es homogénea. Las instituciones requieren, por tanto, respuestas diferenciadas según territorio, plataforma, edad y características socioculturales de los públicos. Esto implica autenticar contenidos oficiales, preservar archivos y fuentes primarias, documentar los procedimientos de verificación, definir vocerías y protocolos de crisis, utilizar formatos accesibles y mantener canales institucionales que permitan a la ciudadanía comprobar información sin depender exclusivamente de redes sociales comerciales.

En términos de gestión pública, la principal implicación es que la comunicación estratégica debe institucionalizarse como una función transversal y no como un componente periférico de difusión. Las áreas de comunicación, datos, tecnología, atención ciudadana, transparencia, gestión de riesgos y dirección institucional necesitan operar con criterios compartidos. La preparación previa resulta especialmente relevante: matrices de severidad, umbrales de intervención, responsables definidos, repositorios verificables y procedimientos de actualización pueden reducir el tiempo de respuesta sin sacrificar precisión. Del mismo modo, la evaluación del desempeño comunicacional debería trascender métricas de alcance e incorporar indicadores de comprensión, credibilidad, percepción de transparencia, participación y capacidad ciudadana para verificar información.

La gobernanza de la respuesta frente a la desinformación también exige límites normativos y éticos. Una política institucional eficaz no debe convertir la protección de la integridad informativa en un mecanismo para restringir crítica, pluralidad o libertad de expresión. Por ello, toda intervención pública de verificación debe ser auditable y proporcional: identificar la afirmación cuestionada, exponer evidencia, transparentar el método empleado, distinguir hechos de interpretaciones y reconocer incertidumbre cuando exista. La colaboración con medios, academia, organizaciones sociales y actores independientes puede aportar contrapesos, legitimidad metodológica y capacidades especializadas, al tiempo que disminuye el riesgo de que el Estado monopolice la definición de lo verdadero.

Las conclusiones deben interpretarse considerando las limitaciones metodológicas de la investigación. El estudio adopta una revisión integrativa y conceptual y, por tanto, no estima tamaños de efecto ni demuestra relaciones causales entre las cuatro capacidades propuestas y la confianza ciudadana. Además, la evidencia empírica específicamente ecuatoriana todavía es limitada y se concentra en coyunturas electorales y fenómenos emergentes. En futuras investigaciones conviene contrastar el modelo mediante encuestas, experimentos de comunicación, análisis de redes, estudios de casos múltiples y diseños longitudinales que permitan determinar qué combinaciones de transparencia, oportunidad, participación, pre-bunking y alfabetización producen mejores resultados y bajo qué condiciones institucionales o territoriales.

En síntesis, el aporte central del artículo consiste en proponer que la resiliencia frente a la desinformación no depende únicamente de la capacidad de detectar y corregir falsedades, sino

de la calidad de la infraestructura relacional e informativa que una institución construye de manera sostenida. Una institución que comunica con evidencia, escucha, anticipa riesgos, reconoce límites y coopera con actores externos dispone de mejores condiciones para proteger su legitimidad cuando aparece una crisis informativa. En ecosistemas digitales caracterizados por incertidumbre, inteligencia artificial y competencia permanente por la atención, la comunicación estratégica deja de ser una función de apoyo para convertirse en una capacidad esencial de gobernanza democrática y de construcción de confianza pública.

Referencias bibliográficas

Argenti, P. A. (2017). Strategic communication in the C-suite. *International Journal of Business Communication, 54*(2), 146-160. https://doi.org/10.1177/2329488416687053

Canel, M.-J., & Luoma-aho, V. (2019). *Public sector communication: Closing gaps between citizens and public organizations*. Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781119135630

Castells, M. (2013). *Communication power* (2nd ed.). Oxford University Press.

Cornelissen, J. (2023). *Corporate communication: A guide to theory and practice* (7th ed.). SAGE.

Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., Cook, J., Schmid, P., Fazio, L. K., Brashier, N., Kendeou, P., Vraga, E. K., & Amazeen, M. A. (2022). The psychological drivers of misinformation belief and its resistance to correction. *Nature Reviews Psychology, 1*, 13-29. https://doi.org/10.1038/s44159-021-00006-y

European Union Election Observation Mission. (2025). *Ecuador 2025: Final report*. European External Action Service. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/2025/documents/Final%20Report%20EU%20EOM%20Ecuador%202025%20EN%20Total%20-%20Cover.pdf

Grunig, J. E. (2009). Paradigms of global public relations in an age of digitalisation. *PRism, 6*(2), 1-19. https://www.prismjournal.org/uploads/1/2/5/6/125661607/v6-no2-a1.pdf

Guadarrama Torres, J. J., Virbanescu, T., & Tapia Segovia, A. I. (2026). Redes sociales y fake news en las elecciones presidenciales de Ecuador 2025: Netnografía y análisis de caso de la provincia de Cotopaxi. *Scripta Mundi, 5*(2), 7-36. https://doi.org/10.53591/qny84865

Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J. (2019). Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook. *Science Advances, 5*(1), eaau4586. https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4586

Hallahan, K., Holtzhausen, D., van Ruler, B., Verčič, D., & Sriramesh, K. (2007). Defining strategic communication. *International Journal of Strategic Communication, 1*(1), 3-35. https://doi.org/10.1080/15531180701285244

Ireton, C., & Posetti, J. (Eds.). (2018). *Journalism, "fake news" & disinformation: Handbook for journalism education and training*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552

Kozyreva, A., Lewandowsky, S., & Hertwig, R. (2020). Citizens versus the Internet: Confronting digital challenges with cognitive tools. *Psychological Science in the Public Interest, 21*(3), 103-156. https://doi.org/10.1177/1529100620946707

Miranda Romero, A. E., Mera Cedeño, M. J., Illicachi Guzñay, J., & Arteño Ramos, R. (2025). Deepfake como estrategia para desinformar en las redes sociales durante las campañas electorales en Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales, 31*(4), 223-238. https://doi.org/10.31876/rcs.v31i4.44850

OECD. (2021). *OECD report on public communication: The global context and the way forward*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/22f8031c-en

OECD. (2024a). *Facts not fakes: Tackling disinformation, strengthening information integrity*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/d909ff7a-en

OECD. (2024b). *Government at a glance: Latin America and the Caribbean 2024*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/4abdba16-en

OECD. (2024c). *OECD survey on drivers of trust in public institutions - 2024 results: Building trust in a complex policy environment*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9a20554b-en

Pennycook, G., Epstein, Z., Mosleh, M., Arechar, A. A., Eckles, D., & Rand, D. G. (2021). Shifting attention to accuracy can reduce misinformation online. *Nature, 592*(7855), 590-595. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03344-2

Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). Fighting misinformation on social media using crowdsourced judgments of news source quality. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 116*(7), 2521-2526. https://doi.org/10.1073/pnas.1806781116

Roozenbeek, J., & van der Linden, S. (2019). Fake news game confers psychological resistance against online misinformation. *Palgrave Communications, 5*, 65. https://doi.org/10.1057/s41599-019-0279-9

Suing, A. (2025). Disinformation, AI and regulation in Ecuador's 2025 presidential election. *Frontiers in Political Science, 7*, 1624206. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1624206

Suing, A., Ganazhapa, H., & Medina, J. (2026). Media and information literacy in the face of election disinformation generated by artificial intelligence: Experiences from Ecuador. *Frontiers in Political Science, 8*, 1834093. https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1834093

Tandoc, E. C., Jr., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining "fake news": A typology of scholarly definitions. *Digital Journalism, 6*(2), 137-153. https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143

UNESCO. (2023). *Guidelines for the governance of digital platforms: Safeguarding freedom of expression and access to information through a multistakeholder approach*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387339

Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. *Social Media + Society, 6*(1), 1-13. https://doi.org/10.1177/2056305120903408

Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science, 359*(6380), 1146-1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559

Vraga, E. K., & Bode, L. (2020). Defining misinformation and understanding its bounded nature: Using expertise and evidence for describing misinformation. *Political Communication, 37*(1), 136-144. https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1716500

Walter, N., Cohen, J., Holbert, R. L., & Morag, Y. (2020). Fact-checking: A meta-analysis of what works and for whom. *Political Communication, 37*(3), 350-375. https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1668894

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe. https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c

Zerfass, A., Verčič, D., Nothhaft, H., & Werder, K. P. (2018). Strategic communication: Defining the field and its contribution to research and practice. *International Journal of Strategic Communication, 12*(4), 487-505. https://doi.org/10.1080/1553118X.2018.1493485

ANEXO LA CARTA DE ACEPTACIÓN

Revista Científica Multidisciplinar G-ner@ndo
ISSN: 2806-5905

08-10-2026

CARTA DE ACEPTACIÓN DE ARTÍCULO CIENTÍFICO

Por la presente se certifica que el artículo titulado: **"LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA FRENTE A LA DESINFORMACIÓN DIGITAL: DESAFÍOS PARA FORTALECER LA CONFIANZA CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ECUADOR".** Un trabajo de investigación de los autores: ***Christian Emmanuel Vargas Peñafiel, Gabriel Germán Usiña Báscones, Mayra Alexandra Samaniego Arias,*** siendo su artículo revisado por Doble Par Ciego y Sistema de Doble Revisión Editorial, antes de ser publicado.

El artículo será publicado en la Revista Científica Multidisciplinar G-ner@ndo ISSN: 2806-5905, en la edición julio - diciembre, 2026, Volumen 7, Número 2. Verificable en nuestra plataforma:
https://revista.gnerando.org/revista/index.php/RCMG

Revista Científica Multidisciplinar G-NER@NDO ISSN 2806-5905

Lic. Angel Villarreal C., MBA.
EDITOR REVISTA G-NER@NDO
revistagnerando@gmail.com

Link de la Publicación:
https://revista.gnerando.org/revista/index.php/RCMG/article/view/1554

UNEMI

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

¡Evolución académica!

@UNEMIEcuador